



Las residencias piden blindar la atención que reciben ahora del CAP

MARTA RICART
Barcelona

Los geriátricos piden a la Generalitat que se establezca de forma plena y permanente el modelo que ha forzado la Covid-19 en que las residencias tienen cubierta la asistencia por el centro de atención primaria (CAP) de su zona. Así lo pidió ayer Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la patronal que agrupa al 70% de las mil residencias de Catalunya.

Recordó que antes de la epidemia muchas residencias "no existíamos para los CAP" y la atención sanitaria la prestaban enfermeras y médicos contratados por los geriátricos. Ante el aumento de casos de coronavirus y muertes en las residencias en primavera (han fallecido más de 4.100 residentes), el Departament de Salut asumió su control sanitario. Pascual señaló que así debería ser siempre –que había planes para hacerlo que nunca se aplicaban ale-

gando que los CAP están saturados–, pues si esos jubilados estuvieran en su casa los atendería el CAP. Para Pascual, no tiene lógica que no lo haga si viven en una residencia. Por ello, defendió que "Salut no rescató a las residencias, le estamos agradecidos, pero asumió las competencias que ha tenido siempre".

Ahora, Pascual teme que, al crecer el número de visitas a los CAP, no sigan atendiendo a las residencias, como ya les ha advertido algún

centro. Por ello, urgió a que se aplique el refuerzo que aprobó Salut de contratar a 160 médicos y 270 enfermeras más en los CAP para poder atender las residencias.

La presidenta de ACRA reiteró, como hizo en el Parlament, que Catalunya necesita gastar 3.000 millones al año en el sector de la dependencia, el doble que ahora. Ayer, el secretario de estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, anunció que el Gobierno ultima un "plan de choque" para la dependencia para revertir los recortes de años.

En cuanto a la situación de las residencias catalanas ante la Covid-19, es mejor que meses atrás, con menos del 1% de los 52.000 residentes infectados (unos 300 frente a

15.150 en julio) y 40 residencias rojas, con epidemia no controlada. Pascual dijo que la situación es mejor porque se separan los residentes infectados o con sospechas de contagio, se hacen grupos pequeños, cribajes con pruebas PCR...

También, hasta fin de año, reciben una tarifa de 196,3 euros más por plaza que ha permitido ampliar el personal. Pascual opina que esta preparación no es igual en todas las autonomías. Con todo, señaló que sería conveniente disponer, por ejemplo, de tests rápidos en los centros. También ve positivo que los residentes tengan más visitas, salidas y actividades y pidió que se puedan agilizar los ingresos y que se reabran los centros de día. ●